

espacialidades

Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura.

JULIO-DICIEMBRE 2018 | VOLUMEN 08 | NÚMERO 02 | PUBLICACIÓN SEMESTRAL | ISSN-2007-560X



Detalles sobre la publicación, incluyendo instrucciones para autores e información para los usuarios en: <http://espacialidades.cua.uam.mx>

Juan Manuel Fernández Chico (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey)

Acción y organización política en espacios de exclusión social: estudio de un polígono en el sureste de Ciudad Juárez, Chihuahua

pp. 88-103

Fecha de publicación en línea: 17 de diciembre de 2018.

DOI: <http://www.doi.org/10.24275/uam/cua/dcsh/esp/vol08/num02/Fernandez>

© Juan Manuel Fernández Chico (2018). Publicado en *Espacialidades*. Todos los derechos reservados. Permisos y comentarios, por favor escribir al correo electrónico: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx

ESPACIALIDADES. Volumen 8, Núm. 02, julio - diciembre de 2018, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, editada en la Ciudad de México, México. Con dirección en Av. Vasco de Quiroga 4871, Cuajimalpa, Lomas de Santa Fe, CP: 05300, Ciudad de México, México. Página electrónica de la

revista: <http://espacialidades.cua.uam.mx/> y dirección electrónica: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx. Editora en jefe: Dra. Fernanda Vázquez Vela. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2011- 061610480800-203, ISSN: 2007-560X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: María Fernanda Flores Torres (Dendrita Publicidad S. A. de C. V.), Lago Peypus, núm. 237, int. 107, Colonia Lago Norte, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11460, Ciudad de México; Fecha de última modificación: diciembre de 2018. Tamaño de archivo 3.5 MB.

Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura tiene como propósito constituirse en un foro de discusión académica que aborde la compleja, contradictoria y multicausal relación entre el espacio y la vida social. Espacialidades se inscribe en el debate académico internacional sobre el giro espacial en las ciencias sociales e invita al análisis de diversas prácticas sociales y formas de organización y acción política desde una perspectiva multidisciplinaria que ponga énfasis en las diferentes escalas territoriales. Los textos publicados incorporan métodos y problemas tratados desde la sociología, la ciencia política, la economía, los estudios urbanos, la geografía, los estudios culturales, la antropología, la literatura, el psicoanálisis y el feminismo, entre otros.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del comité editorial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Directorio

RECTOR GENERAL: Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

SECRETARIO GENERAL: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

RECTOR: Dr. Rodolfo René Suárez Molnar

SECRETARIO DE UNIDAD: Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DIRECTOR: Dr. Roger Mario Barbosa Cruz

JEFE DE DEPARTAMENTO: Dr. Gabriel Pérez Pérez

Revista Espacialidades

DIRECTORA: Dra. Fernanda Vázquez Vela

ASISTENTE EDITORIAL: Mtro. Guillermo Paredes Orozco

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB: Carlos G. Pérez Velázquez

EDICIÓN TEXTUAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO: Mtro. Hugo Espinoza Rubio

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA: © 2018 Ambrose Chua en Unsplash @serverwentdown, <https://unsplash.com/photos/zxbNbuncq1g>

COMITÉ EDITORIAL: Dra. Montserrat Crespi-Valbona (Universitat de Barcelona, España), Dra. Verónica Crossa (El Colegio de México, México), Dra. Marta Domínguez Pérez (Universidad Complutense de Madrid, España), Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dra. Graciela Martínez-Zalce (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Dr. Alejandro Mercado (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dr. Jorge Montejano Escamilla (Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", México), (UAM-C), Dra. Rocío Rosales Ortega (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México), Dr. Vicente Ugalde (El Colegio de México, México).

COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. Tito Alegría (El Colegio de la Frontera Norte), Dra. Miriam Alfie (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dr. Mario Casanueva (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dra. Claudia Cavallin (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), Dr. Humberto Cavallin (Universidad de Puerto Rico), Dra. Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca, España), Dra. Clara Irazábal (Columbia University, Estados Unidos), Dr. Jorge Lanzaro (Universidad de la República, Uruguay), Dr. Jacques Lévy (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Francia), Scott Mainwaring (University of Notre Dame, Estados Unidos), Miguel Marinas Herrera (Universidad Complutense, España), Edward Soja † (University of California, Estados Unidos), Michael Storper (London School of Economics, Reino Unido).

espacialidades

Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura

Julio-Diciembre 2018 | volumen 08 | número 02
Publicación semestral

Acción y organización política en espacios de exclusión social: estudio de un polígono en el sureste de Ciudad Juárez, Chihuahua

Political Action and Organization in Spaces of Social Exclusion: A Study of an Polygon in Southeastern Ciudad Juarez, Chihuahua.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ CHICO*

Resumen

Este trabajo estudia las formas de organización y acción política de siete poblaciones dentro de un polígono en condiciones de exclusión social en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza e industrial en el norte de México. Estas poblaciones cumplen con características homogéneas: trabajos precarios en la industria de exportación, propietarios de sus viviendas, hacinamiento, baja escolaridad y bajos ingresos. En la búsqueda de hacerse de recursos suficientes para sobrevivir, generan una serie de estrategias de organización colectiva, negociación con el Estado y prácticas informales e ilegales de acceso a servicios básicos y programas sociales. Éstas han sido históricamente asociadas por la ciencia política clásica como prácticas despolitizantes o apolíticas, cuando en realidad son formas complejas en que se construye lo político como una forma de supervivencia al abandono del Estado. A través de la aplicación de metodología cualitativa, se rescatan siete casos, demostrando que hay un mundo con ritmos, lenguajes y prácticas propias.

Palabras clave: exclusión social, organización y acción política, política, Estado, ciencia política.

Abstract

This paper studies the forms of organization and political action in seven populations living within a polygon with high levels of social exclusion in Ciudad Juarez, which is a border and industrial city in northern Mexico. These populations have similar characteristics: precarious employment in the export sector, homeownership, overcrowding, low levels of schooling and low income levels. While looking to obtain enough resources to survive, they generate a series of strategies such as collective organization, negotiation with the state, and informal and illegal practices that give them access to basic services and social programs. These practices have historically been referred to by classical political science as depoliticizing or apolitical ones, when in reality they are complex forms of construction of the political as a strategy to survive abandonment on the part of the state. Through the application of qualitative methodology, seven cases are described, proving that there is a world with its own rhythms, languages and defining practices.

Keywords: social exclusion, political action and organization, politics, state, political science.

Fecha de recepción: 20 de abril de 2018

Fecha de aceptación: 30 de agosto de 2018

* Profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Campus Ciudad Juárez. C.e.: <jmfernandezchico@gmail.com>.

Introducción

Eduardo vive con su familia en un fraccionamiento de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, una ciudad moldeada a imagen y semejanza de las industrias extranjeras de exportación, alejada de la mancha urbana, sin acceso a hospitales, supermercados, oficinas de gobierno ni transporte público. Sierra Vista, la zona habitacional en donde vive, se encuentra a dos kilómetros de la parada del camión, el único punto de conexión con el resto de la ciudad. Sierra Vista está rodeada de desierto y lotes baldíos; las casas no pasan los 44 metros cuadrados y la única forma para hacerse dueño de esa propiedad es a través de un crédito de gobierno que se gestiona directamente con la compañía inmobiliaria.

Después de sufrir un asalto cuando caminaba de su casa a la parada del camión, Eduardo decidió darle un drástico giro a su vida: obtuvo un crédito bancario para adquirir una camioneta y crear un sistema de transporte social con otro grupo de vecinos, conectando a Sierra Vista con la avenida principal.

Ese sistema de transporte, que posteriormente se llamó “raiteros”, se encuentra en la ilegalidad, pues no cuenta con permiso para operar ni cobrar, sus vehículos no tienen placas y no existe ningún tipo de reconocimiento por parte del gobierno estatal o municipal sobre su trabajo. Lo único que existe es una serie de acuerdos informales y verbales que Eduardo y el resto de los raiteros han pactado con policías, tránsitos y supervisores. Cuando es necesario, Eduardo también recurre a algunos líderes populares partidistas para solucionar problemas con las asociaciones de transportistas, así como policías o transitos nuevos que desconocen las reglas que han pactado con los que estaban anteriormente.

El caso de Eduardo, uno entre muchos que existen en esa zona de Ciudad Juárez, es una fotografía de cómo las poblaciones en exclusión generan formas de organización y acción política desde una condición de ilegalidad e informalidad para satisfacer necesidades básicas como la movilidad y la seguridad. Pero también muestra cómo la forma en que estas poblaciones habían sido estudiadas anulaba su voz y la clara capacidad de agencia que se desarrolla desde la exclusión.

Este artículo estudia los casos de personajes como Eduardo para mostrar cómo, en la exclusión, se gestan formas de organización y acción política distintas a las que se construyen desde la legitimidad o reconocimiento del Estado, desde el voto hasta las movilizaciones sociales. Prácticas que, históricamente, se habían definido como apolíticas o despolitizadas (por ejemplo, el clientelismo, el soborno o la intermediación de líderes populares para agilizar procesos burocráticos) son monedas de cambio corriente en poblaciones sin muchas opciones para salir de su condición de excluidos.

Plantear esto es poner a discusión conceptos como el de ciudadanía, el cual nace desde una tradición liberal y jurídica, la cual presupone la igualdad de los ciudadanos frente al reconocimiento del Estado, quienes tienen derechos y obligaciones por igual, tanto en la dimensión civil (representación jurídica), política (de participación en las decisiones de la administración pública) y social (que les garantiza una calidad de vida digna) (Marshall, 1998). Algunos estudios han mostrado que la ciudadanía liberal, la figura constante en las democracias capitalistas contemporáneas (Durand, 2010) no alcanza a explicar muchos de los fenómenos actuales, en particular aquellos por parte de poblaciones en exclusión o marginación social (Faist, 2015: 25-56; Fernández, 2014; Olvera, 2008; Tamayo, 2010).

Partir de una mirada más allá de los alcances tradicionales de la ciudadanía es reconocer la existencia de prácticas políticas que se encuentran dentro de la ilegalidad, un tipo de espacio flotante de prácticas subyacentes que son la única posibilidad de poblaciones en exclusión de vincularse con el Estado y sus beneficios (acceso a servicios básicos públicos, derechos sociales, infraestructura urbana, programas sociales). Este espacio se manifiesta en lo que Scott (1990) ha denominado como “infrapolítica”, un lugar incierto al que las poblaciones desconectadas recurren para negociar acuerdos y beneficios con servidores públicos estatales de bajo nivel.

El estudio se realizó en una zona al suroriente de Ciudad Juárez, un polígono aislado del resto de la ciudad, ya sea por una barrera natural, un vasto desierto al oeste y al sur, la frontera con Estados Unidos al oeste y una avenida de alta velocidad al norte. Además de su aislamiento urbano, el polígono tiene algunas características específicas: las zonas habitacionales desarrolladas son viviendas de interés social, casas diminutas a las que sólo las poblaciones más pobres acceden a través de créditos públicos, y es una de las zonas con mayor presencia de plantas maquiladoras. Estas

condiciones han atraído a una población empobrecida, sin acceso a estudios, obligada a ocupar puestos formales dentro de la maquiladora y con créditos que merman su calidad de vida.

El suroriente de Ciudad Juárez es un fenómeno característico de las ciudades industriales: una ciudad dormitorio construida para satisfacer la demanda de mano de obra de las industrias transnacionales, lo que peculiariza su condición de exclusión, pues las poblaciones ven afectada su calidad de vida por estar dentro de sistemas formales de vivienda y trabajo. En el suroriente trabajé en siete fraccionamientos de interés sociales, eligiendo los que se encontraban más alejados, aislados y que tenían los menos servicios públicos del polígono. Trabajé, principalmente, con poblaciones organizadas: comités de vecinos, sistemas de transporte social, líderes partidistas o vecinos que, en su aislamiento, buscan generar, como sea posible, estrategias para salir de su exclusión.

De estos siete casos, rescaté sus historias sobre cómo, desde la exclusión, generaron formas de organización exitosas para satisfacer servicios que ni el sector público, privado o social ha podido satisfacer, y cómo en estas formas de organización y acción política han desarrollado complejas prácticas de vinculación con el Estado, desde lugares alejados de los canales formales de participación. Demostrando que hay un mundo con ritmos, lenguajes y prácticas propias.

De la exclusión social a la funcional

El concepto de exclusión social es complejo por su diversidad semántica, lo que provoca que se nombren muchos fenómenos bajo un mismo término. Más cercano a los estudios urbanos, la exclusión social se define como la restricción a servicios públicos (agua, electricidad, gas, alumbrado público, servicio de limpieza) y derechos sociales (educación, salud, seguridad, empleo), a partir del lugar que se habita dentro de un espacio urbano, en donde hay características homogéneas en la población, como trabajos precarios, salarios bajos e imposibilidad de acceder de manera eficiente a la movilidad urbana (Matute, 2013).

Se propone una redefinición del concepto de exclusión social a partir de añadir a la ecuación sistemas laborales, comerciales y crediticios formales que aumentan y perpetúan la exclusión. Esto provoca lo que he llamado exclusión funcional: personas propietarias de sus viviendas, que adquirieron por medio de créditos públicos a partir de programas gubernamentales, pero que, a raíz de sus bajos ingresos, sólo pueden acceder a tipos de vivienda de interés social, con dimensiones que provocan hacinamiento, situadas en zonas aisladas en donde el uso del suelo es más barato por no tener acceso a servicios, además de estar alejados de la mancha urbana; que buscan créditos de consumo para tener acceso a más productos pero que, a la larga, merman sus ingresos, debido a los altos intereses de las instituciones prestamistas, y que para poder tener acceso a esos créditos públicos deben contar con trabajos formales, los cuales son precarios, con jornadas exhaustivas y en condiciones muchas veces inseguras y desgastantes; la lejanía de sus casas provoca un aumento en el gasto de movilidad y de acceso a servicios básicos, como los alimentos de la canasta básica. Están integrados a la economía formal, incluso son indispensables para mantener estos sistemas, pero en condiciones precarias, abusivas y excluidas.

Estas características provocan que las(os) excluidos funcionales (Fernández, 2017) se conviertan en el suelo de un sistema formal, pues mantienen a la industria de exportación, formando parte de un ejército de trabajadores y trabajadoras que reduce los gastos de producción, haciendo trabajo manual y mal pagado, mantienen a las compañías inmobiliarias al generar clientes cautivos que no tienen otra opción que acceder a sus viviendas económicas, pero alejadas de la mancha urbana y hacinadas, que son económicas de construir y fáciles de vender, están enganchados a los programas crediticios del gobierno, pues con sus sueldos bajos les es imposible acceder a la propiedad de una vivienda o gastos que superan sus necesidades más esenciales, generando contribuyentes esclavizados a pagar esos créditos por largo tiempo.

Asimismo, su distanciamiento espacial afecta su acceso a la educación de calidad y servicios médicos, junto con la carencia de espacios de vinculación gubernamental, lo que se refleja en una ignorancia de los procesos institucionales de gestión y demanda de servicios públicos y formas de organización; es decir, están vinculados al Estado, pero de manera deficiente, pues, aunque acceden a créditos públicos e interactúan con los organismos estatales, se encuentran en una posición de desventaja o marginación.

La exclusión funcional se refiere a que, a pesar de ser poblaciones en condiciones de exclusión, “funcionan” en sistemas formales de vivienda, trabajo y crédito, los cuales son precisamente los causantes de su exclusión.

Entre la política y los políticos: un mapa para entender las organizaciones y acciones políticas

Hay un espectro de acciones, organizaciones y discursos que se mueven entre la política y lo político, la primera como aquello que pasa por la legitimación y reglamentación del Estado; la segunda, como la capacidad de los sujetos de incidir y pensar los asuntos de índole público.

De acuerdo con Tamayo (2010), esto permite estudiar fenómenos políticos que no habían sido examinados por la ciencia política clásica, que las denomina participación institucional y participación activa no institucional. Esto permite reconocer una mayor diversidad de expresiones que proponen agendas, identifica problemas en común y buscan soluciones posibles, ya sea por medio de los canales institucionales o a través de otros medios fuera del reconocimiento del Estado, como en el caso algunos movimientos sociales (Tamayo, 2010). Por otra parte, ese espectro entre política y político, Gómez lo explica de la siguiente manera:

En este sentido, se entiende entonces que mientras *la política* se refiere a las acciones públicas orientadas a crear un determinado orden, a mantener una institucionalidad y a organizar la coexistencia humana; lo político asume el conflicto como intrínseco a la condición humana y entiende el antagonismo como su principal motor, en donde los consensos y los acuerdos tienen siempre un carácter provisional, en tanto se basan en actos de exclusión y se mueven en una esfera de decisión y no de libre discusión (Gómez, 2012).

La política es el escenario institucional en el que se discuten los temas públicos, un espacio simbólico representado en lo que Habermas (1981) llamó la “esfera pública” (*Öffentlichkeit*): lugar en el que se fijan y discuten agendas por actores claves e influyentes que se posicionan sobre ellos para proponer soluciones. Este espacio es modulado por el Estado y sus instituciones, encargadas de regular a los sujetos que negocian entre estas instituciones y entre sí, a partir de estructuras fijas con reglas aparentemente claras (Martínez y Cubides, 2012).

En cambio, lo político es la capacidad de negociación con el poder sobre las necesidades de las y los sujetos (algo más cercano al *zoon politikón* aristotélico), quienes desarrollan y colectivizan capacidades para negociar, personal y directamente, con distintos actores sobre temas vinculados con el poder. Esto permite sumar fenómenos políticos que no pasan por los espacios de la institucionalidad formal de la política, sino del accionar directo y llano de los sujetos sobre sus propias necesidades, incluso en su capacidad de generar agendas colectivas, movilizar y administrar recursos, solucionar problemas públicos y crear vínculos con las instituciones del Estado, bajo reglas no reconocidas por éste.

La propuesta es entender lo político como algo que puede ocurrir fuera de la política y de las formas de asociación y acción reconocidas por el Estado, como los partidos políticos, el voto, las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales con registro público y sector privado, o a partir de los mecanismos regulados para incidir en las instituciones públicas (Alcántara, 1993).

Lo que propongo es un tránsito de la política (como escenario institucional) a lo político, como estrategias de negociación sobre el poder y lo público, en donde la primera se presenta como dinámicas de organización y ordenamiento desde las instituciones; en tanto que la segunda serían los conflictos y contradicciones de los sujetos en sus constantes negociaciones del poder.

En el corazón de esta discusión radica el concepto de ciudadanía, comprendido por la ciencia política tradicional como el estatus legal y sustantivo de todo miembro a un Estado nación, el cual se entiende en tres dimensiones mutuamente constitutivas: civil (derechos de autonomía y libertad), política (para votar y ser votado, así como participar en las decisiones públicas) y social (derechos y obligaciones que garanticen una vida digna) (Marshall, 1998); incluso con intentos de alejarse de la visión más formal del concepto de ciudadanía, entendida como una membresía jurídica que busca homogenizar a

una población a partir de sus accesos a derechos y la definición de obligaciones, las relaciones que los ciudadanos fijan con las instituciones públicas pasan por una revisión desde el Estado para regularlas, sean éstas institucionales o no (como los movimientos sociales en el caso de las segundas).

Es la necesidad de transitar, en el mismo sentido de la política a lo político, de la ciudadanía a las subjetividades políticas: el sujeto que habita lo político, que construye posiciones críticas sobre sus propios contextos, a partir de sus relaciones personales y construye estrategias desde sus antecedentes y conocimientos (Bosteels, 2004), incluso desde ese atravesar su corporalidad para dar sentido a su condición y a sus capacidades de acción (Vergara, 2009) que se refleja en cómo la exclusión los impacta corporalmente y los hace sumarse a esfuerzos colectivos a partir de compartir estas condiciones: enfermedades, hambruna, secuestros o asaltos.

A partir de aquí, reconocemos otras formas de hacer lo político e incidir en la política, a partir de adentrarnos en los sujetos y sus formas de definir, interpretar, negociar y buscar cambiar sus condiciones estructurales, las cuales no deben verse como casos aislados, clientelizados o despolitizados por no participar activamente en las reglas y espacios de la escena pública.

A partir de su condición de exclusión, estas poblaciones se vinculan con los aparatos administrativos y políticos del Estado a través de un sistema subyacente, una política underground de negociaciones y acuerdos que les permiten acceder a recursos y permisos que, en su condición formal, les serían negados.

Foucault (2002) reconoce que existen dos formas en que se manifiesta el poder: una superficial, visible, que se posee y se representa en figuras, actores, reglamentos e instituciones claramente identificables y, hasta cierto punto, acordados; frente a una manifestación oculta, micro, que no se posee, sino que se ejerce, que se define en tácticas, estrategias, técnicas y funcionamientos. Esta última se presenta como una forma subyacente de poder, la cual permite la efectividad y existencia de aquél, pues todo lo que no es capaz de lograr de manera visible, lo hace por tácticas ocultas (Žižek, 1998).

Estas dos manifestaciones no son independientes una de otra, sino que se vinculan en un constante vaivén, haciendo que el poder -como una expresión de dominio de alguien sobre otro- funcione para quien lo ejerce. Esto se refleja en cómo la condición de exclusión de estas poblaciones no las aísla totalmente, pues están conectadas con los aparatos del Estado por distintos canales, por ejemplo, por medio de su trabajo formal, sus créditos públicos, sus viviendas en zonas habitacionales legales, o por medio de constructoras encargadas de la gestión de servicios; o bien desarrollan comités vecinales registrados ante instancias públicas, pero estas vinculaciones formales los obliga a desarrollar prácticas informales para sobrevivir.

Estos aspectos los contempla el Estado como parte de considerarlos sujetos de derechos, pero para garantizar su acceso a educación, transporte o salud recurren a sobornos o corrupción; sus salarios tienen un tope mínimo para sobrevivir, pero en la realidad es tan bajo que los obliga a recurrir a negocios informales o acuerdos colectivos de intercambio o créditos sociales; las compañías inmobiliarias los categorizan como clientes de sus viviendas, pero los obliga a recurrir a sus propios medios para allegarse los recursos básicos que las autoridades (municipales o estatales) deberían de garantizarles, por ejemplo, el servicio de limpia, acceso al agua potable, gestionar el transporte y el alumbrado público.

Este espacio libre entre las manifestaciones visibles (la política) y las invisibles (lo político) es lo que permite que coexista una subyacencia política de las poblaciones excluidas con los aparatos del Estado para obtener los recursos necesarios para su supervivencia.

Siete casos de estudio en Ciudad Juárez desde la perspectiva de la antropología política

Partir desde la antropología política nos obliga a una mirada más profunda y detallada a los sujetos, a sus narrativas y formas de acción sobre asuntos públicos, pues se estudia a sujetos activos, quienes participan en constantes negociaciones colectivas que pasan por sus formaciones personales, que muchas veces se presentan de manera contradictoria y poco clara (Piedrahita, 2013), estudiar sus narrativas, sus miradas a los contextos propios y estos mismos por ser es sumar una voz que pocas veces se consideran en los estudios sobre participación política (Gómez, 2012), en los que las técnicas como la etnografía, la entrevista y la observación ayudan a explorarlos con mayor detalle.

Ciudad Juárez se ha desarrollado a imagen y semejanza de la industria maquiladora: son industrias transnacionales de producción en masa, que globalizan y fragmentan sus procesos que se situaron en países como México gracias a la reducción de costos de asentamiento y de impuestos, y en localidades como Ciudad Juárez, por su cercanía con Estados Unidos para la movilidad de material (como se muestra en la figura 1).

Esta industria irrumpió en los años sesenta absorbiendo enormes cantidades de personas, principalmente en condiciones de vulnerabilidad, para ser integradas a las cadenas de producción en masa. Esto provocó, por generaciones, la necesidad de tener a la mano a poblaciones sin educación, en situaciones de vulnerabilidad, provenientes del interior del país o de Centroamérica, sin redes en la ciudad, y con necesidades de adquirir un trabajo inmediato, con salarios deplorables y condiciones laborales precarias.

Figura 1. Ubicación de Ciudad Juárez en la frontera México-Estados Unidos



FUENTE: Google Earth.

En esta lógica, la mancha urbana de Ciudad Juárez creció en función de las necesidades de movilidad de la maquiladora, asentando parques industriales en las periferias, algunas ya absorbidas por el crecimiento de la ciudad, empujando también a las poblaciones empobrecidas a esas zonas a las afueras de la ciudad, en donde se acercaban a sus centros de trabajo, pero alejadas de los servicios públicos y sociales de la ciudad. Esto impactó en un crecimiento sin planeación, desmedido, con grandes espacios de dispersión que afectaron su conectividad y fragmentaron la ciudad en diversos centros que eran empujados por la industria maquiladora, siendo la zona del sureste de Ciudad Juárez la que padece mayor dispersión y lejanía de la mancha urbana, como se observa en la figura 2.

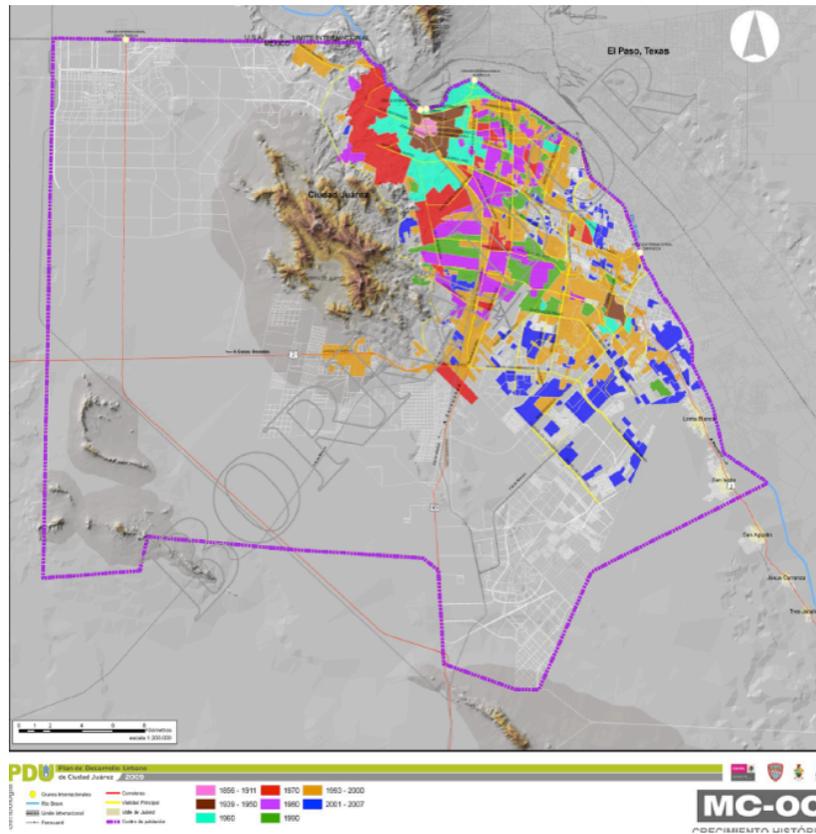
Figura 2. Mancha urbana de Ciudad Juárez y la zona sureste (resaltada en el círculo rojo)



FUENTE: Google Earth.

Esta desconexión del resto de la ciudad se debe a un tardío desarrollo inmobiliario e industrial, coincidente con reformas a la vivienda que incorporaban al sector privado como desarrollador principal de la oferta de casas y la posibilidad de adquirir suelo rural para el desarrollo urbano; como se advierte en la figura 3, en la que el sureste es la zona urbana desarrollada de manera más reciente respecto del resto de la ciudad.

Figura 3. Crecimiento histórico de Ciudad Juárez



FUENTE: ACJ (2010).

Estos factores se tomaron en cuenta para la creación de un polígono en la zona que padece la mayor exclusión de la ciudad, que además tiene una población homogénea (Almada, 2012) que cumple con los criterios de la exclusión funcional, como es la relación con sus trabajos (obrerros en las plantas industriales), estado socioeconómico (acceso al salario mínimo), educación (no superior a los estudios de secundaria), título de vivienda (la mayoría son dueños) y acceso a créditos públicos y consumo (con al menos uno), además de contar con alta presencia de plantas industriales y vivienda tipo interés social (con dimensiones de 44 metros de construcción, en zonas habitacionales amuralladas, con alta densidad demográfica y que se accede por medio de créditos gubernamentales).

Figura 4. Delimitación del polígono suroriente



FUENTE: elaboración propia

En la figura 4 se remarca la delimitación del polígono estudiado, en el que se eligieron los siete casos de análisis

Descripción de los casos analizados

Los siete casos aquí examinados varían en cuanto a sus problemas de acceso a servicios públicos, la distancia de la mancha urbana, perfiles de las poblaciones, fechas de fundación y necesidades básicas. También se ubican en distintos lugares dentro del espectro de lo político y la política a partir de la complejidad de sus organizaciones políticas, así como las diversas formas de vinculación con los aparatos administrativos del Estado.

- Pobladores sin organización política en Pedregal San Isidro

Estos pobladores no tienen una organización formalizada en términos públicos ni de manera interna, por lo que todas sus gestiones y estrategias políticas son de manera atomizada, generando vinculaciones directas entre los vecinos a partir de necesidades muy específicas. De los siete casos, éste es el que padece mayor exclusión espacial, pues es el más alejado tanto de avenidas principales (una de las cuales se encuentra a tres kilómetros), en la que es posible tomar el transporte público, y a kilómetro y medio del fraccionamiento más cercano, que es Sierra Vista. Sus problemas principales son la falta de transporte público, acceso a productos básicos de consumo, falta de escuelas, centros de salud y espacios recreativos.

- El sistema de transporte social en Sierra Vista

Esta organización, sostenida por cinco miembros y encabezada por su miembro fundador, responde a la deficiencia del transporte público, el cual es esporádico y lento, generando un sistema de transporte social que conecta al fraccionamiento

de Sierra Vista con el bulevar Independencia, a 1.2 kilómetros de distancia, en una zona desértica sin alumbrado público, usando sus vehículos como transporte público. Se llaman a sí mismos “raiteros”, una apropiación del término en inglés ride, apropiado al español como “rait”, que significa “dar un aventón”. No cuentan con permiso de funcionamiento y dos de las cinco camionetas no tienen placas y sus conductores tampoco cuentan con licencia. Este fraccionamiento padece de un transporte público deficiente, de inseguridad (principalmente robo habitacional y asaltos a transeúntes), la calle que conecta a la avenida principal es de acceso limitado y costoso a los productos básicos de consumo y los centros de salud.

- Vecinos organizados políticamente en Jardines de Roma 3

Esta organización se mueve bajo la sinergia generada por el antiguo comité vecinal, que surgió de manera improvisada, sin registro formal en el municipio ni apoyo de la constructora, respondiendo principalmente a las necesidades de gestionar servicios y administrar la seguridad privada dentro del fraccionamiento. Hoy existe como un referente simbólico, pues el nombre del comité vecinal ha desaparecido, aunque son los mismos vecinos de esa época los que hacen el trabajo de gestión en la actualidad. Su vinculación se hace por medio de la presidenta del comité vecinal de Jardines de Roma 3, Yaluany, quien fungía como asesora para la vinculación institucional, personaje también presente en Senderos de Oriente. Los problemas que se padecen en este fraccionamiento son la restricción al agua potable (sólo acceden a ésta de las 21:00 a las 9:00 horas), inseguridad (principalmente robo habitacional y asaltos a transeúntes, así como casas abandonadas y vandalizadas).

- Comité vecinal (sin registro) en Santa Isabel 1

Este comité, a pesar de no estar registrado en el municipio, tiene la aprobación total de la constructora, la cual, además, como una política interna, capacitó a varios vecinos para integrar el comité y realizar trabajos de gestión de servicios, de recursos y trabajo administrativo. Lo peculiar de este fraccionamiento es que se trata de la construcción más reciente, por lo que el proceso de entrega de casas aún sigue, lo que propicia que haya nuevos vecinos que arriban al lugar y obligan a reestructurar el comité vecinal para adaptarlo a los nuevos pobladores, lo que ha generado conflictos internos en el comité, los cuales se reflejan en cambios administrativos constantes, generando problemas de comunicación, principalmente con los nuevos pobladores. Los problemas de este fraccionamiento son el acceso al transporte público (es esporádico y lento), el acceso al gas, problemas de seguridad (principalmente robo a casa habitación), que se ha incrementado a raíz de que los conflictos del comité afectan el servicio de seguridad, además de la venta de drogas dentro del fraccionamiento.

- Comité vecinal (con registro reciente) en Senderos de Oriente

Este comité es el tercero en Senderos de Oriente; su creación responde a la ineficiencia de los comités anteriores en la gestión y administración de recursos y programas públicos, lo que obligó a un grupo de vecinos a retomarlo, buscando la asesoría de Yaluany, la presidenta del comité vecinal de Jardines de Roma 3, quien los ha vinculado con distintas instancias públicas para acceder a recursos de programas públicos.

A diferencia de los otros casos, este comité no sólo se dedica a la resolución de problemas específicos, sino que funge como un canal administrativo general que resuelve distintos problemas suscitados en el fraccionamiento. Aquí los principales problemas son la inseguridad, específicamente el robo habitacional y asaltos afuera del fraccionamiento, casas abandonadas, problemas de alumbrado público y la focalización de personas en condiciones de pobreza, en particular adultos mayores y personas con discapacidad (esto se conoce gracias a un registro interno del comité vecinal).

- Comité vecinal y centro comunitario en Urbivilla

Este fraccionamiento es semicerrado, pues no cuenta con una caseta de seguridad y hay varias entradas en las intermediaciones del fraccionamiento, lo que dificulta delimitar la zona del fraccionamiento con otros de su alrededor. El comité vecinal cuenta con registro en el municipio y tiene una vinculación muy estrecha con distintas instancias públicas locales, principalmente por la vinculación de su presidenta con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia gubernamental encargada de programas sociales integrales para mujeres, niños y personas con discapacidad, en donde trabaja como voluntaria, lo que fue el punto de entrada para vincular al comité y a la comunidad con instancias públicas.

Al ser un comité vecinal registrado, cuenta con trece miembros activos en el trabajo de gestión y administración, que además se articula con otros vecinos que no pertenecen al comité. Su trabajo se concentra, principalmente, en un parque que circunda las casas que habitan la mayoría de los miembros del comité, pero que ahora ha desembocado en la creación de un centro comunitario, a partir de la apropiación de una casa abandonada. Los problemas que el fraccionamiento enfrenta son la violencia y la inseguridad provocada por pandillas, ya que generan una serie de problemas (asaltos y robo a casa habitación), restricción del uso de espacios públicos, venta de drogas, peleas callejeras y daño al equipamiento urbano, como el alumbrado, al igual que un número de casas abandonadas que se convierten en focos de infecciones y zonas que potencializan la inseguridad.

- Comité de vecinos de Jardines de Roma 3

Este comité es uno de los más antiguos y de más vinculación con instancias públicas, cuenta con registro en el municipio y los trece miembros requeridos para estar dados de alta. Su particularidad es la figura de Yaluany, la presidenta del comité, quien llegó a ese lugar gracias a su vinculación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde trabaja en la creación de cuadros de movilización popular, lo que le permite tener un rango de influencia que se extiende a otros fraccionamientos de la zona; además de su vinculación con una red de congregaciones cristianas que también realizan trabajo de altruismo que desemboca en su fraccionamiento.

Este comité se asemeja al de Senderos de Oriente, pues no se enfoca a problemas específicos, sino que sirve más como un sistema administrativo para atender una diversidad de necesidades. Lo destacado de Yaluany es que resulta un referente de vinculación para otras comunidades y comités, poniendo a su disposición sus redes y experiencias, que ha generado dentro del partido político. Los problemas de Jardines de Roma 3 son, principalmente, de inseguridad: robo a casa habitación y asaltos afuera del fraccionamiento, además de casas abandonadas.

Las constantes en casi todos los casos son casas y espacios públicos abandonados (figura 5), que se utilizan como lugares de concentración de actividades delictivas y de focos de infección al acumular altas cantidades de basura (figura 6). La inseguridad desborda a causa de la distancia, que afecta en la presencia de cuerpos policíacos y una incapacidad de las compañías inmobiliarias por mantener casetas de control del tránsito vehicular dentro de las zonas habitacionales (figura 7).

Estos siete casos no son lo más representativos en cuanto a su capacidad de organización y acción política, o vinculación subyacente con el Estado, pero sí sirven para extender un abanico de diversas formas de expresión que permiten contrastar y comparar casos distintos que se encuentran en condiciones espaciales y estructurales similares. Cada caso desarrolla formas de negociación distintas dentro de sus comunidades, discursos, vinculaciones con los aparatos del Estado y diferentes agendas a partir de condiciones como el grado de aislamiento, los servicios públicos que carecen, el número de

Figura 5. Casas abandonadas y parque descuidado



FUENTE: creación propia

Figura 6. Casas abandonadas con alta concentración de basura

FUENTE: creación propia

Figura 7. Casetas de seguridad abandonadas

FUENTE: creación propia

habitantes que viven en el fraccionamiento, la presencia de líderes partidistas o asociaciones civiles y religiosas, o bien la participación de las compañías constructoras.

De los siete casos estudiados, se eligieron informantes clave, ya sea por su antigüedad en la zona habitacional o por su importancia dentro de la organización vecinal. Estos informantes fueron entrevistados durante un periodo de un año, en el que se dio seguimiento a algunos de los trabajos que realizaban dentro de sus comunidades, convirtiéndolos en una voz representativa de los colectivos para los que trabajan.

De igual manera, se realizaron recorridos etnográficos, estudiando, de primera mano, las condiciones estructurales de los espacios analizados; de los cuales se recogió un registro fotográfico que luego se sumó a un corpus de análisis para posteriores miradas a la zona.

Discusión: hacer política desde los márgenes

Cada caso se ubica dentro de un lugar específico del espectro política-político, relación basada en la complejidad de la organización interna de la comunidad, la forma en que establecen sus agendas y se proponen las salidas a sus condiciones de exclusión, así como el cómo y con quién se vinculan con los aparatos administrativos y políticos del Estado.

Estos mecanismos han de asumirse como políticos al momento que responden a la ausencia del Estado, construyen agendas propias sobre los temas relevantes, generan formas de negociación y vinculación con el Estado, en particular con los actores ubicados en las partes inferiores de las jerarquías institucionales, y crean acciones colectivas al margen de los discursos y canales formales (voto, partidos políticos, asociaciones civiles, presencia en los medios o gestión directa en los espacios de gobierno).

Cada caso de estudio es distinto, a partir de su contexto espacial (condiciones de aislamiento, acceso a servicios o bien la compañía constructora) y social (densidad poblacional, antigüedad de los habitantes, presencia de líderes partidistas). Mientras unos actúan desde lo político (desde el interior de sus comunidades bajos los medios que tienen a la mano), en un afán por incidir en la política (por ejemplo, que haya un desarrollo de políticas públicas e implementaciones legales), otros se quedan circunscriben sólo a lo político: buscar satisfacer (mediante sus propios medios) sus necesidades básicas; mientras que otros se mueven de manera indistinta entre sí (actúan y se organizan desde sus propios medios, pero se vinculan con el Estado a partir de prácticas subyacentes, como el favor, el soborno o la extorsión).

El caso de Pedregal San Isidro, el fraccionamiento más aislado y con problemas de movilidad más graves, se ubica en el polo de lo político, al crear mecanismos de intercambio de favores personales, sin la existencia de organizaciones o formas de asociación más compleja que les permita gestionar recursos. Así, por ejemplo, quienes tienen vehículo particular llevan y traen a las personas a la zona residencial; mientras que los que no ayudan, como las guarderías, hacen trabajos domésticos a cambio de los favores de movilidad.

Su vinculación con el Estado es a través de la constructora, la cual gestiona algunos servicios básicos (como el agua y la electricidad), en tanto que el acceso al servicio de gas, algunos productos básicos de consumo o ciertos derechos sociales (como los educativos y de salud) son responsabilidad de los habitantes.

Es el caso con menor densidad poblacional y el segundo de fundación más reciente, los vecinos están desarticulados en términos organizativos e implementan estrategias individuales y atomizadas.

En las respectivas comunidades de Jardines de Roma 3, Urbivilla y Senderos de Oriente se han configurado sistemas más complejos, creando comités vecinales con registros legales en el municipio y participando en la gestión de recursos y programas sociales. A pesar de esto, sus mecanismos de vinculación con el Estado corre a cargo de líderes partidistas o intermediarios electorales, a los que recurren a través de sobornos para llegar a programas sociales que, una vez canalizados, buscan acceder de manera formal. Como parte de esta negociación, se encuentra la movilización electoral o la venta del voto.

Jardines de Roma 3 cuenta con la presencia de una mujer llamada Yaluany, una lideresa del PRI, quien les allega recursos y ayudas del gobierno a su colonia a partir de su intermediación con el partido; incluso ahora que el gobierno municipal y estatal no son priistas, los cuadros electorales siguen funcionando en zonas periféricas, en donde la forma más eficiente de acceder a dichos recursos es a través de esas complejas redes electorales.

El caso de Urbivilla es distinto, pues aunque también cuenta con la presencia de una lideresa en la comunidad llamada Verónica, sus redes se han construido a partir del hecho de que ella colabora como voluntaria en el DIF municipal, lo que le permitió contar con contactos en distintas esferas y niveles de gobierno, contactos que pone a disposición del comité vecinal, del que ella es presidenta.

Senderos de Oriente también cuenta con una presidenta que funge como intermediaria con su comunidad, la cual se ha acercado a líderes priistas para acceder a recursos públicos, o bien ser atendidos para demandar el acceso a servicios o a la infraestructura pública.

Un caso peculiar dentro del polígono es el de los raiteros en Sierra Vista, quienes han desarrollado un complejo sistema de transporte público social que mueve a los vecinos del fraccionamiento del interior de la zona habitacional a una avenida principal, todo esto a raíz de la ineficiencia del transporte público otorgado por el gobierno estatal.

Los raiteros operan de manera ilegal, pues no cuentan con los permisos para operar como transporte público, licencias de conducir o placas para sus vehículos, por lo que han desarrollado una serie de vinculaciones con policías y agentes de tránsito, a partir de un sistema de cuotas y acuerdos para trabajar sin sufrir ser multados o detenidos. Estos acuerdos subyacentes los han mantenido desde hace siete años, cuando fueron fundados por Eduardo, el líder moral de los raiteros, y son revitalizados cada cierto tiempo por la rotación de agentes en la zona.

De igual manera, Jardines de Roma 1 cuenta con un comité de vecinos que opera sólo en términos simbólicos, pues no está registrado ante el gobierno municipal, se encuentra al margen de negociaciones con el Estado para demandar recursos o satisfacer necesidades, ya que recurre a líderes comunitarios conectados con partidos políticos para facilitar el acceso a algunos programas sociales o ayudas, pero sin comprometerse a participar en actos electorales, o sin buscar una permanencia formal de los servicios públicos.

Este comité de vecinos aparece y desaparece conforme se presentan ciertas necesidades en momentos clave, y sin tomar acción directamente en las instancias o con los servidores públicos involucrados, sino a partir de una intermediaria del PRI que gestiona este tipo de servicios. Dicha intermediación no es legal, pero les ha facilitado la gestión de servicios deficientes como el agua y la seguridad.

Así, sin importar el lugar que ocupen en este espectro, entra la política y lo político, su condición de exclusión funcional los obliga a interactuar con el Estado y con el sector privado en una relación desigual, creando una dependencia de trabajos precarios y viviendas baratas, a cambio de tener un ingreso seguro y un lugar para habitar, aunque ello implique perpetuar su condición de exclusión social. Esta relación con sistemas formales de vivienda y trabajo los hace desconfiar de los procedimientos formales, por lo que desarrollar organizaciones y acciones políticas que no pasen por el reconocimiento formal se vuelve una práctica común.

En distintos grados, todos desarrollan estrategias políticas, a veces conociendo los procedimientos formales, pero con “un pie” dentro de lo informal; otros fluctúan entre uno y otro (lo formal e informal), conforme lo requieran sus necesidades, o simplemente estando al margen de aquéllos de manera permanente.

Cada uno desarrolla una forma distinta de organizarse y actuar en términos políticos, pero siempre a través de un sistema subyacente, el cual les permite acceder a programas, recursos o atenciones a los que, de otra forma, les serían imposible acceder. Esta política subyacente coexiste, en algunos de los casos, con la política institucional y sus canales formales de procedimiento y demanda. Así pues, encontramos la relación entre ambos conceptos ya señalados, para entender las formas de organización y acción política en estas poblaciones excluidas: se mueven entre lo político y la política, a veces ubicándose más cerca o lejos de algunos de los polos, y estas formas de interacción se ejecutan a través de prácticas subyacentes.

Esto último no debe verse como una forma nula de pensar y actuar lo político, tampoco de definirlos como *apolíticas* o *despolitizadas* por no usar los canales institucionales y formales de participación de la vida política. Dichas poblaciones, muchas veces por necesidad y desconocimiento, recurren a estas estrategias como una vía de escape de sus condiciones de exclusión, así como para liberarse de esas fuerzas estructurales formales (vivienda, trabajo, créditos públicos y de consumo) a las que han sido impelidos.

Conclusiones

En este trabajo se estudian ciertas formas de organización y acción política de poblaciones que viven en condiciones de exclusión funcional, un tipo de exclusión que se perpetúa al obligar a poblaciones empobrecidas a estar integradas a sistemas formales de vivienda, trabajo y créditos públicos (o privados), en siete casos de estudio en una zona al suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua (en la frontera norte de México).

El hallazgo es que estas formas de organización y acción política se desplazan en un espectro entre lo político (cómo se responde a la falta de recursos públicos para tener una vida digna) y la política (la forma institucional de responder a esa falta de recursos públicos). En este espectro es posible identificar un tipo de subyacencia política, una vinculación informal e ilegal con los aparatos administrativos del Estado, basada en otros códigos y valores ajenos a los canales institucionales formales. Esa relación ha definido a estas poblaciones como *apolíticas*, cuando en realidad generan complejos sistemas de organización y acción políticas, fijando agendas, negociando con las instituciones y accediendo a servicios públicos restringidos.

Esto no debería sólo ser un cambio de enfoque o la suma de otras voces en discusiones sobre qué y cuándo estamos frente a un fenómeno político, sino también una propuesta de política pública que permita crear sinergias más efectivas de organización dentro de las comunidades en condiciones de exclusión, a partir de fortalecer y proteger las redes internas de estas comunidades, identificar los otros canales de vinculación con el Estado y reconocer que muchas de estas propuestas son más efectivas que las políticas desarrolladas por los gobiernos municipales, estatales y federales.

Fuentes

Alcántara, M. (1993). "Cuando hablamos de ciencia política: ¿de qué hablamos?", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 4, núm. 55 (octubre-diciembre): 147-178.

Almada, T. (2012). "Las familias de Ciudad Juárez", en H. Almada y L. Barraza, coords., *La realidad social y las violencias: Ciudad Juárez*. Ciudad Juárez: Conavim/UACJ/Incid Social, pp. 53-92.

Ayuntamiento de Ciudad Juárez (ACJ) (2010). "Plan de Desarrollo Urbano Ciudad Juárez 2010". Ciudad Juárez: ACJ/Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

Bosteels, B. (2004). "Políticas del sujeto", *Metapolítica*, núm. 25.

Durand, V. (2010). *Desigualdad social y ciudadanía precaria: ¿estado de excepción permanente?* México: Siglo XXI/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Faist, T. (2015). "Migración y teorías de la ciudadanía", en P. Mateos, ed., *Ciudadanía múltiple y migración. Perspectivas latinoamericanas*. México: CIDE/CIESAS, pp. 25-56.

Fernández, J. (2017). *Excluidos funcionales y subjetividades políticas*. Balti: Editorial Académica Española.

Fernández, M. (2014). *La ciudadanía incompleta: derechos económicos y sociales en la periferia urbana de Brasil*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gómez, J. (2012). "Los meandros de las narrativas políticas juveniles", en C. Piedrahita, Á. Díaz y P. Vommaro, coords., *Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos*. Bogotá: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"/IDEP/Clacso.

Habermas, J. (1981). *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona: Gustavo Gili.

Marshall, T. (1998). *Ciudadanía y clase social*. Barcelona: Alianza.

Martínez, M. y J. Cubides (2012). "Acercamientos al uso de la categoría de 'subjetividad política' en procesos de investigación", en C. Piedrahita, Á. Díaz y P. Vommaro, coords., *Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos*. Bogotá: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"/IDEP/Clacso.

Matute, N. (2013). "Ciudad de Guatemala: centralidad urbana y exclusión social: el caso del asentamiento La Limonada", en T. Bolívar y J. Espinosa, *Los lugares del hábitat y la inclusión*. Quito: Flacso Ecuador/Clacso/Miduvi, pp. 433-446.

Olvera, A. (2008). *Ciudadanía y democracia*. México: IFE.

Piedrahita, C. (2013). "Reflexiones metodológicas. Acercamiento ontológico a las subjetivaciones políticas", en C. Piedrahita, Á. Díaz y P. Vommaro, coords., *Acercamientos metodológicos a la subjetivación política: debates latinoamericanos*. Bogotá: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"/IDEP/Clacso, pp.15-30.

Scott, James (1990). *Domination and the arts of resistance*. Ann Arbor: Yale University Press.

Tamayo, S. (2010). *Crítica de la ciudadanía*. México: Siglo XXI/UAM.

Vergara, G. (2009). "Conflicto y emociones. Un retrato de la vergüenza en Simmel, Elías y Giddens como excusa para interpretar prácticas en contextos de expulsión", en C. Figari, ed., *Cuerpo(s), subjetividad(es) y conflicto(s)*. Buenos Aires: ciccus, pp. 35-52.

Žižek, S. (1998). "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en Slavoj Žižek y Fredric Jameson, *Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós, pp. 137-188.